RESOLUCION PARTICULAR**VISTO:**

El Procedimiento de Determinación Tributaria y de Aplicación de Sanciones N° 00, expediente N° 00 y otros del Sumario Administrativo instruido a la firma contribuyente **NN** (en adelante **NN**) con **RUC 00**;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Orden de Fiscalización Puntual N° 00, notificada el 22/09/2022, ampliada con relación a su alcance, mediante Resolución Particular N° 00 notificada el 25/10/2022 la Subsecretaría de Estado de Tributación (**SET**), a través de la Dirección General de Fiscalización Tributaria (**DGFT**) dispuso la Fiscalización Puntual a **NN** en cuanto a la obligación del IRACIS General correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, y la obligación del IVA General de los periodos fiscales 10/2019, 11/2019 y 08/2020, específicamente sobre las compras realizadas a los proveedores: 1) XX con RUC 00 2) XX con RUC 00, 3) XX con RUC 00, 4) XX con RUC 00 y 5) XX con RUC 00. A dicho efecto, se le solicitó a la firma contribuyente que presente sus documentos, los cuales fueron presentados fuera de plazo.

Los controles se originaron como resultado de las averiguaciones y cruces de información realizados por el Departamento de Planeamiento Operativo, mediante los cuales se identificaron a varios proveedores inconsistentes, considerando las inscripciones irregulares de los mismos, la falta de infraestructura y personal para realizar las supuestas actividades declaradas; cuyos datos han sido utilizados al solo efecto de obtener comprobantes de ventas timbrados para su comercialización.

Considerando que **NN** presentó ante la Administración Tributaria (**AT**) los documentos requeridos, los auditores de la **SET** procedieron a la verificación de los mismos, como así también analizaron la información obtenida de las entrevistas realizadas a los proveedores inconsistentes y los datos obrantes en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, teniendo como resultado que los proveedores cuestionados no realizaron las operaciones comerciales referidas en atención a que los mismos no poseían la infraestructura requerida para el volumen del importe de las facturas impugnadas, como así también no contaban con contratos, carecen de cuentas bancarias, no cuentan con elementos productivos susceptibles de generar o ejecutar las actividades como las consignadas en las facturas cuestionadas. Además, es importante mencionar que las declaraciones juradas de las personas cuyos datos fueron falseados y utilizados eran presentadas desde un único usuario a través de direcciones IP vinculadas, y por último se confirmó que las firmas que constan en los Reportes de entrega de documentos Preimpresos difieren a las firmas contenidas en los documentos de identidad de los proveedores cuestionados.

En ese contexto, según, Informe Final de Auditoría N° 00 del 14/12/2022, los auditores de la **SET** presumieron que **NN** utilizó facturas de contenido falso como respaldo de los créditos, costos y gastos consignados en las DD.JJ. de las obligaciones controladas, irregularidad que no da derecho al crédito o deducciones según lo establecido en los Arts. 7°, 22, 85 y 86 de la Ley N° 125/1991 (en adelante la Ley), en concordancia con los Arts. 17 y 68 del Anexo del Decreto N° 1030/2013 y el Art. 108 del Decreto N° 6359/2005.

Por los motivos señalados los auditores de la **SET** recomendaron calificar la conducta de conformidad con lo previsto en el Art. 172 de la Ley, según los presupuestos establecidos en los Nums. 3) y 5) del Art. 173, porque presentó declaraciones juradas con datos falsos y suministró

informaciones inexactas, haciendo valer ante la **AT** formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados y el Num. 12 del Art. 174 de la misma norma legal. Además, por el incumplimiento de los deberes formales, por la presentación fuera de plazo de los documentos requeridos por la **AT**, corresponde la aplicación de la sanción de Contravención prevista en el Art. 176 de la Ley, según lo establecido en el Anexo de la RG N° 13/2019 Num. 6) Inc. a), por un monto equivalente a G 300.000.

Con relación a la multa, dejaron constancia de que la misma será graduada según las circunstancias agravantes y atenuantes, pudiendo ser equivalente a 1 y hasta 3 veces el monto del tributo defraudado o pretendido defraudar, conforme al Art. 175 de la Ley, a establecerse a las resultas del Sumario Administrativo:

OBLIGACIÓN	PERIODOS / EJERCICIO S FISCALES	MONTO GRAVADO	IMPUESTO	MULTA
		A	B=Ax10 %	C (se aplica sobre columna B)
521 - AJUSTE IVA	10/2019	98.545.455	9.854.546	SERÁ GRADUADA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 175 DE LA LEY, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTS. 212 Y 225 DE LA MISMA NORMA LEGAL.
521 - AJUSTE IVA	11/2019	83.727.273	8.372.727	
521 - AJUSTE IVA	08/2020	189.886.380	18.988.638	
511 - AJUSTE IRACIS (*)	2019	182.272.728	18.227.273	
511 - AJUSTE IRACIS	2020	189.886.380	18.988.638	
551- AJUSTE CONTRAVENCIÓN	14/12/2022	0	0	300.000
TOTAL		744.318.216	74.431.822	300.000

(*) Durante el Proceso de Sumario se realizó la corrección del enunciado de la obligación de Renta correspondiente al año 2020, debiendo ser la misma: 800 – AJUSTE IRE, la cual ya se observa en el Resuelve de la presente Resolución.

A fin de precautar las Garantías Constitucionales de la Defensa y el Debido Proceso, mediante la Resolución de Instrucción de Sumario N° 00 notificada en fecha 23/01/2023, el Departamento de Sumarios y Recursos 1 (en adelante **DSR1**) dispuso la instrucción del Sumario Administrativo a **NN** juntamente con su representante legal **XX** con **CIC N° 00**, conforme a lo establecido en los Arts. 212 y 225 de la Ley, que prevén los procedimientos para la Determinación Tributaria y para la Aplicación de Sanciones, en concordancia con lo dispuesto en la RG N° 114/2017, por la cual se precisan aspectos relacionados con los procedimientos de Sumario Administrativo y de Recursos de Reconsideración.

La firma sumariada y su representante legal no presentaron su descargo, se procedió a la Apertura del Periodo Probatorio mediante Resolución N° 00 notificada en fecha 09/02/2023, considerando que no fueron presentadas pruebas para su diligenciamiento el **DSR1** procedió al Cierre del Periodo Probatorio mediante Resolución N° 00 notificada en fecha 09/03/2023, considerando que la firma contribuyente presentó sus Alegatos en tiempo y forma, se llamó Autos para Resolver.

Analizados los antecedentes del caso y los argumentos expuestos por **NN**, el **DSR1** señaló lo siguiente:

La XX en representación de la firma contribuyente, mediante poder general, manifestó: "... el proceso de control de cumplimiento de las obligaciones impositivas de... inició mucho antes del 22 de setiembre del año 2022, luego de varios actos de ampliación de su alcance, pero culminó el 14 de diciembre del año 2022, fecha en que se elaboró el Informe final de la inspección realizada,... transcurrieron 57 días hábiles, es decir más de 45 días hábiles sin que hubiera dictado acto válido de ampliación de dicho procedimiento de control. Es decir, los auditores de la SET han EXCEDIDO el PLAZO MÁXIMO previsto en el artículo 31 de la Ley 2.421/04...". (sic)

Es importante aclarar que previo a la Orden de Fiscalización, la **SET** no solo tiene la facultad de requerir documentos, sino además es deber de ella, analizar previamente la situación del contribuyente y si encuentra una sospecha de irregularidad, iniciar la Fiscalización Puntual, tal como concretamente ocurrió en este caso, por lo que la utilización en la fiscalización de las informaciones recabadas durante la etapa previa, resulta lógico, puesto que ellas son las que dieron lugar a la fiscalización.

En tal sentido, el **DSR1** remarcó que la reglamentación al respecto establece que las tareas de Fiscalización Puntual inician con el diligenciamiento de la Orden de Fiscalización y culminan con la suscripción del Acta Final, debiendo llevarse a cabo en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, ampliable por un período igual.

El **DSR1** aclara que el cómputo del plazo inicia el día hábil siguiente al de la notificación de la Orden de Fiscalización hasta la suscripción del Acta Final según lo dispuesto por el Art. 26 de la Resolución General N° 25/2014 y, que en el caso analizado según las constancias de autos, la Orden de Fiscalización se notificó el 22/09/2022 (obrante a fs. 02 del expediente 00), iniciándose el cálculo de los 45 días hábiles el día siguiente de su notificación, finalizando el proceso de fiscalización el 28/11/2022, fecha en la cual fue suscripto el Acta Final (fs. 79 del expediente 00), considerándose para el computo correspondiente los feriados del 03/10/2022 (Victoria de Boquerón) y del 09/11/2022 (Censo Nacional), cumpliéndose de esta forma los 45 días estipulados por la Ley, por lo tanto, se confirma que el plazo de fiscalización no transcurrió en exceso, ya que la misma fue realizada estrictamente en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2421/2004.

Además, **NN**, expresó: "...NULIDAD DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA... surge que la decisión instrumentada en la misma se basa en supuestos hechos que ha considerado demostrados con base en pruebas que nunca fueron ofrecidas admitidas ni producidas en el proceso administrativo sumario... Los procedimientos se basan en conjeturas formuladas por fiscalizadores y supuestas "diligencias" que no se han realizado en el proceso sumario... Por tanto, mal puede basarse la resolución del sumario en supuestos elementos que no existen en el mismo. NO SE PUEDE "VALORAR" supuestas "pruebas" que no existen en el proceso correspondiente... además de ser norma jurídica vigente, es una medida razonable para garantizar a una persona el derecho a defenderse, ya que, en el marco de un debido proceso, quien se defiende debe tener derecho de examinar las pruebas que se han presentado en su contra. Y, la forma de examinar a un testigo que resulte prueba de cargo es por medio de un contra examen. Es decir, otorgándole a quien se defiende, la posibilidad de dirigir preguntas (interrogar) a quien hace afirmaciones de hechos que le afectan... NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (SUMARIO) DE LA SET A LA FISCALIZACIÓN PUNTUAL... los actos realizados por funcionario que no cumplen con el requisito de adecuarse a las prescripciones de la ley, NO SON VALIDOS y, en consecuencia, TAMPOCO SON LEGITIMOS; y un acto INVALIDO por ILEGITIMO es un acto que no puede producir un efecto jurídico alguno... los indicios y actuaciones que ha realizado la Administración Tributaria, lo hizo fuera del procedimiento legal establecido para ello, que es el procedimiento de determinación Artículo N° 212 (Sumario Administrativo)...". (sic)

Es importante mencionar que el Art. 189 de la Ley y el Art. 27 de la Ley N° 2421/2004 autoriza a la **SET** a fiscalizar y controlar a los contribuyentes sin excepción y sin hacer mención taxativa de que los mismos deben ser fiscalizados por una u otra Dirección, además de que esta situación no causa gravamen irreparable alguno a **NN**, motivo por el cual se consideró legítimo el trabajo realizado por la Dirección General de Fiscalización Tributaria, en concordancia a lo dispuesto en el Inc. a) del Art. 1° de la RG N° 40/2014.

Con relación al desarrollo de todas las etapas establecidas en el Art. 212 de la Ley, el **DSR1** manifestó que la recurrente fue debidamente notificada de la apertura del Sumario Administrativo el 23/01/2023 y se estableció un plazo de diez días para que la misma formule sus descargos y ofrezca sus pruebas, en virtud a lo dispuesto en el Num. 3) de los Arts. 212 y 225 de la misma norma legal. Sin embargo ni la firma contribuyente como tampoco el representante legal, solicitaron el diligenciamiento u ofrecieron pruebas, sin embargo, el **DSR1** abrió el Periodo Probatorio mediante Resolución N° 00, notificada el 09/02/2023, considerando que transcurrieron los plazos pertinentes y ante la falta de pruebas pendientes de diligenciamiento, se procedió al Cierre del Periodo Probatorio, por último, transcurrido el plazo para la presentación de los Alegatos, los cuales fueron presentados por **NN** en tiempo y forma, se llamó Autos para Resolver. No habiéndose presentado pruebas que desvirtúen los hechos denunciados por los auditores de la **SET**, conforme a las evidencias recabadas durante la fiscalización se confirman las presunciones previstas en los Nums. 3) y 5) del Art. 173 de la Ley y el Num. 12) del Art. 174 de la misma Ley, ya que conforme a lo establecido en las normas vigentes, las pruebas de inexistencia de la infracción constatada y denunciada por los auditores, recae sobre el contribuyente, por lo que al no hacerlo se tienen por ciertos los hechos denunciados, es importante mencionar que **NN** tampoco demostró el interés necesario para desvirtuar la denuncia de los auditores de la **SET**, considerando que no aportó elementos que acrediten indefensión, limitándose simplemente a señalar supuestos errores de procedimiento, sin que haya producido prueba alguna que indique el perjuicio a sus derechos.

Cabe apuntar que las finalidades de las nulidades procesales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. A ese respecto, Alsina con suma claridad sostiene que *"...donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad..."* (Autor citado, Tratado, Tomo I, pág. 652). Coincide con Podetti, quien puntualiza que el objeto y fin de las nulidades del procedimiento, *"...es el resguardo de una garantía constitucional..."* (Autor citado, Tratado de los Actos Procesales, Tomo II, pág. 481).

Al respecto, el **DSR1** señaló además que los actos administrativos gozan de la presunción de validez conforme lo establece el Art. 196 de la Ley; y en ese sentido fueron expuestos tanto en el Informe Final de Auditoría N° 00, como así también en la presente Resolución Particular, los motivos de hecho y de derecho que llevaron a la **SET** a efectuar la denuncia contenida en el presente Considerando; basada en hechos ciertos, verdaderos, existentes, confirmándose por tanto que el acto administrativo: **a)** fue dictado por la autoridad competente; **b)** respetando el debido proceso; y **c)** en la forma estipulada en la ley. Al respecto, el tratadista Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo, Pág. 272, sostiene que: *«Los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio; así sucede cuando se ha desconocido o vulnerado principios de derecho público o garantías individuales»*.

En cuanto a lo que sostiene la firma contribuyente con relación al valor de las entrevistas informativas realizadas a los supuestos proveedores, debido a que no han tenido intervención en las mismas y tampoco fueron realizadas durante el proceso de Sumario.

El Art. 189 de la Ley y el Art. 27 de la Ley N° 2421/2004 autoriza a la **SET** a fiscalizar y controlar a los contribuyentes sin excepción, pudiendo realizar los trámites que crea pertinente a los efectos de confirmar y validar las inconsistencias detectadas durante los procesos de control, es

importante aclarar que las entrevistas realizadas son una herramienta de investigación que se ha concebido con una meta específica, con el fin de cotejar información a través de una comunicación fluida de preguntas, a diferencia de la prueba testifical o prueba testimonial que en derecho representa un medio probatorio emanado de las declaraciones que hagan testigos ante una autoridad judicial, como parte de un proceso.

Por tanto, con base en los argumentos expuestos, el **DSR1** concluyó que resulta improcedente la nulidad invocada por la firma contribuyente, ya que la misma debe fundarse en una irregularidad o arbitrariedad de tal magnitud, que su simple ocurrencia produzca algún daño o indefensión a la parte quien dice haberse agraviado por este hecho, lo cual en este caso no ocurrió, confirmando la legalidad del Acta Final N° 00 y el Informe Final N° 00, expedidos durante el proceso de fiscalización, como así también el presente Proceso de Sumario, considerando que tanto la firma contribuyente y el representante legal fueron notificados de cada una de las instancias del procedimiento, teniendo a su disposición los antecedentes obrantes en autos para su verificación o copia.

Por último **NN** manifestó: *"... cualquier irregularidad en la representación o en la inscripción de los contribuyentes que han sido proveedores de mi representado ante la SET, o en los trámites realizados ante la SET para la generación de sus facturas, son cuestiones internas de la Administración Tributaria y el hecho de que funcionarios de dicha entidad hubieran autorizado inscripciones en el RUC supuestamente irregulares o la impresión indebida de facturas, no puede resultar argumento suficiente para impugnar compras... la Firma **NN**, ha realizado compras de mercaderías, incluyendo la verificación de que el proveedor que presentó las ofertas se encuentre inscripto en el RUC ante la Subsecretaría de Estado de Tributación y, además, que las facturas que hubiera expedido contaran con el timbrado válido conforme a los mecanismos puestos a disposición por parte de la SET a los contribuyentes, para el referido efecto..."*. (sic)

Respecto a las facturas impugnadas con timbrados válidos, el **DSR1** mencionó que, si bien la **AT** autorizó la emisión de comprobantes de ventas y otorgó el timbrado a los proveedores, la responsabilidad de la **SET** se limita a la verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter formal establecidos en la reglamentación, sólo a efectos del otorgamiento del timbrado, siendo de exclusiva responsabilidad del vendedor y del comprador lo consignado en la factura. Por tanto, concluyó que el timbrado del documento no constituye aval suficiente para demostrar que la venta efectivamente se realizó.

Además, el **DSR1** expuso que la **SET** basó su denuncia en las evidencias obtenidas durante los diferentes procedimientos realizados, donde se entrevistó a los supuestos proveedores, como así también realizaron la visita in situ en los domicilios declarados en el RUC de los proveedores cuestionados, constatando que los mismos no contaban con logística, infraestructura y personal para realizar las actividades económicas de la importancia de los montos y conceptos consignados en las facturas impugnadas, además de las comparaciones realizadas de las firmas que obran en los Reportes de Entrega de documentos Preimpresos presentados por la imprenta Grafica XX con la Cédula de Identidad de los proveedores cuestionados, resultando a simple vista diferentes, por lo que es materialmente imposible que hayan realizado transacción económica alguna, es decir, no fueron entregados los bienes ni prestados los servicios que fueron consignados en los comprobantes emitidos a favor de la firma contribuyente. Por ende, los fundamentos expuestos por **NN** no representan un elemento que refute lo ya expuesto en este proceso, por tanto, el **DSR1** confirmó que corresponde la impugnación de los comprobantes respectivos de las operaciones irregulares.

Conforme a estos hechos, **NN** incumplió lo establecido en los Arts. 7º, 22, 85 y 86 de la Ley, en concordancia con los Arts. 17 y 68 del Anexo del Decreto N° 1030/2013 y el Art. 108 del Decreto N° 6359/2005, que exigen que las operaciones sean reales (que el hecho haya existido y que se haya producido la realización de compra venta efectivamente entre quien dice ser el comprador y el vendedor) y la debida documentación de estas, para convalidar el crédito fiscal, costos y gastos como computables en la liquidación de las obligaciones controladas.

En consecuencia, ante las evidencias y hechos expuestos el **DSR1** recomendó confirmar la reliquidación del IRACIS General correspondiente al ejercicio fiscal 2019, del IRE correspondiente al ejercicio fiscal 2020, y la obligación del IVA General de los periodos fiscales 10/2019, 11/2019 y 08/2020, realizada por los auditores de la **SET** a los efectos de determinar la cuantía exacta de su obligación con el Fisco.

Con base en los argumentos precedentemente expuestos señaló que **NN** incumplió con la normativa tributaria al obtener un beneficio indebido al lograr reducir los montos de las obligaciones controladas en perjuicio del Fisco, al consignar créditos fiscales, costos y gastos relacionados a operaciones inexistentes, confirmándose de esta manera la presunción establecida en los Nums. 3) y 5) del Art. 173 y el Num. 12) del Art. 174 de la Ley, se cumplen todos los presupuestos para calificar su conducta de acuerdo con el tipo legal previsto en el Art. 172 de la misma norma legal.

A fin de establecer la graduación de la sanción, el **DSR1** consideró como agravantes las establecidas en los Nums. 5), 6) y 7) del Art. 175 de la Ley, y en ese sentido señaló que la firma contribuyente cometió infracciones en varios periodos y ejercicios fiscales, afectando negativamente la determinación de las obligaciones controladas al declarar créditos fiscales, costos y gastos relacionados a operaciones inexistentes, pese a contar con la posibilidad de asesoramiento profesional, como así también la importancia de perjuicio fiscal y las características de la infracción, pues la firma utilizó facturas de contenido falso por valor de G 744.318.216, por lo que concluyó que corresponde aplicar la multa por Defraudación del 200% sobre los impuestos a ingresar determinados por los auditores.

Además, el **DSR1** confirmó la aplicación de la sanción por Contravención por la comisión de infracciones formales, contempladas en el Inc. a) Num. 6 del Anexo de la Resolución General N° 13/2019, en concordancia con el Art. 176 de la Ley, equivalente a una multa de G 300.000.

En cuanto a la responsabilidad del representante legal de **NN**, el **DSR1** expresó que de conformidad a los Arts. 180 y 182 de la Ley, los representantes legales son responsables en cuanto no procedan con la debida diligencia en sus funciones, respecto a los tributos que correspondan a su representada y que la misma se limita al valor de los bienes que administren o dispongan. Por lo que, de acuerdo a lo señalado en los puntos precedentes se comprobó que la firma sumariada presentó las declaraciones juradas con datos falsos y suministró informaciones inexactas al no declarar la totalidad de sus ingresos haciendo valer ante la **SET** datos inapropiados a la realidad de los hechos gravados y en consecuencia corresponde establecer la responsabilidad subsidiaria de su Representante Legal **XX** con **CIC N° 00** en relación a la percepción de los tributos confirmados, ya que el mismo no actuó diligentemente en su calidad de responsable de la empresa ante esta Subsecretaría de Estado de Tributación, debiendo haber desarrollado las acciones concretas para lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias de su representada.

Se puede mencionar igualmente que el Código Civil Paraguayo en su Art. 1174 en concordancia con los Arts. 1111, 1125 y 1126, establece la responsabilidad subsidiaria de los Directores y Síndicos, en casos de mal desempeño en sus funciones, violación de la ley o de sus estatutos, entre otras causales.

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, el **DSR1** recomendó **HACER LUGAR** a la denuncia contenida en el **Informe Final de Auditoría N° 00 del 14/12/2022** del Departamento de Auditoría FT3 dependiente de la **DGFT**.

POR TANTO, en uso de sus facultades conferidas por ley,

**EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN
RESUELVE**

Art. 1: Determinar la obligación fiscal del contribuyente NN con RUC 00, conforme a las razones expuestas en el Considerando de la presente Resolución de acuerdo al siguiente detalle:

Obligación	Periodo	Impuesto	Multa	Total
521 - AJUSTE IVA	10/2019	9.854.546	19.709.091	29.563.637
521 - AJUSTE IVA	11/2019	8.372.727	16.745.455	25.118.182
521 - AJUSTE IVA	08/2020	18.988.638	37.977.276	56.965.914
511 - AJUSTE IRACIS	2019	18.227.273	36.454.546	54.681.819
800 - RESOLUCIÓN DE AJUSTE IRE GENERAL	2020	18.988.638	37.977.276	56.965.914
551 - RESOLUCIÓN DE AJUSTE POR CONTRAVENCIÓN	14/12/2022	0	300.000	300.000
Totales		74.431.822	149.163.644	223.595.466

* Sobre el tributo determinado se deberá adicionar la multa y los intereses por Mora conforme al Art. 171 de la Ley.

Art. 2°.- CALIFICAR la conducta de la firma contribuyente **NN** con **RUC 00** de conformidad con lo establecido en el Art. 172 de la Ley, y **SANCIONAR** a la misma con la aplicación de una multa de 200% sobre el tributo a ingresar resultante de la reliquidación, más una multa por Contravención según lo establecido en el Art. 176 de la Ley.

Art. 3°.- ESTABLECER la responsabilidad subsidiaria de su Representante Legal **XX** con **CIC N° 00**, conforme a los alcances señalados en el Art. 182 de la Ley.

Art. 4°.- NOTIFICAR a la firma contribuyente conforme a la RG N° 114/2017, a fin de que bajo apercibimiento de Ley proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución y a su representante legal para su conocimiento.

Art. 5°.- INFORMAR lo resuelto a la Dirección General de Recaudación y de Oficinas Regionales, a fin de que tome conocimiento de los términos de la presente Resolución, y cumplido archivar.

**ÓSCAR ORUÉ
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN**